

MÁS EMPRESAS PARA MENOS POBREZA: UNA HOJA DE RUTA DESDE EL TERRITORIO



Por Rodrigo Martín

-Director Ejecutivo del Observatorio Socioeconómico de la UCALP

-Economista (UNLP). Magister en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales (UNLP). Doctorando en Estudios del Conurbano (UNAJ).



Por Paulo Bernardo

-Director de Proyectos del Observatorio Socioeconómico de la UCALP

-Político (UCALP). MBA Candidate (IAE Business School - Universidad Austral).

Crecimiento y pobreza

En 2006, un estudio del Banco Mundial¹, que analizó 80 países en desarrollo a lo largo de 20 años, llegó a una conclusión contundente: en el corto plazo, el 75% de las personas que salieron de la pobreza lo hicieron gracias al crecimiento económico y solo el 25% por mecanismos de redistribución. Pero en el largo plazo, la diferencia es aún más marcada: el 98% de quienes dejaron de ser pobres lo hicieron porque vivían en países que crecieron sostenidamente; solo el 2% lo logró exclusivamente gracias a la redistribución. Es decir, la salida de la pobreza no es casual: depende de la cantidad de oportunidades que genera una economía en expansión.

Sin crecimiento sostenido ningún país ha logrado disminuir, de forma persistente, sus niveles de pobreza. Pero el crecimiento no es un fenómeno abstracto: se expresa en estructuras productivas, en tejidos empresariales, y en la capacidad de generar empleo formal y mejorar la productividad. Este vínculo entre crecimiento, sector privado y reducción de la pobreza debe ser entendido no solo a nivel macroeconómico, sino también desde su dimensión territorial. En ese sentido, observar lo que ocurre en regiones como el Gran La Plata permite comprender cómo se manifiestan, en el plano local, las grandes tensiones que afectan al país: informalidad, desigualdad, baja productividad y carencias estructurales.

La densidad empresarial:

Un factor clave para el desarrollo económico de un país es la densidad empresarial, es decir, la cantidad de empresas que operan en relación con la población. Este indicador suele medirse como el número de empresas por cada 1.000 habitantes. La densidad empresarial refleja la capacidad de un país para generar actividad económica y empleo a través de su sector privado. En Argentina, este valor es notablemente bajo en comparación internacional. Según datos de la Fundación Observatorio PyME², Argentina cuenta con 551.000 empresas activas: 12,1 empresas por cada 1.000 habitantes. Se trata de una baja densidad, con datos que están muy lejos de los que, por ejemplo, hay en Uruguay (48), Brasil (25), la Unión Europea (72,3), España (72,7) o México (40,4).

Esto se suma a que Argentina atraviesa un estancamiento tendencial: además de la baja densidad, hay un estancamiento en la cantidad de empresas, que desde hace 20 años oscila entre las 500.000 y 600.000 debido a una baja tasa de natalidad empresarial. Una natalidad similar a los países de África Central.

En otras palabras, Argentina tiene relativamente pocas empresas en funcionamiento para su tamaño poblacional, lo cual sugiere una menor capacidad para ofrecer puestos de trabajo y producir bienes y servicios en la economía. Y acá está el punto: sin un número suficiente de empresas no puede haber suficiente empleo de calidad.

¹ World Bank. (2006). *World Development Report 2006: Equity and Development*. Washington, DC: World Bank.

² Fundación Observatorio PyME. (2024). Informe de Demografía Empresarial. Recuperado de <https://ccirr.org.ar/w9/Descargar.aspx?a=2&i=22625>

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, son las principales generadoras de puestos de trabajo en todo el mundo. De hecho, en los países en desarrollo el sector privado crea alrededor del 90% del empleo³.

Si un país tiene pocas empresas por habitante, es esperable que también haya menos puestos de trabajo formales disponibles por cada 1.000 habitantes, limitando las oportunidades laborales de la población.

Otro indicador crucial es el empleo formal frente a empleo informal. Se considera empleo formal aquel registrado legalmente, con protección social y aportes, mientras que el empleo informal es aquel “en negro” o precario, sin registro ni beneficios laborales.

Los países con tejidos empresariales sólidos tienden a tener mayores proporciones de empleo formal, ya que las empresas establecidas suelen registrar a sus trabajadores.

En América Latina, lamentablemente, la informalidad laboral sigue siendo muy elevada en promedio. Alrededor del 55% de los trabajadores latinoamericanos están ocupados en la informalidad, según datos recientes de la CEPAL⁴. Este promedio regional contrasta fuertemente con el de economías desarrolladas: en Europa, por ejemplo, la informalidad es mucho menor (ningún país de la Unión Europea se acerca siquiera a esos niveles). Incluso dentro de América Latina hay casos con mejor *performance*: Uruguay presenta solo un 22% de trabajadores informales y Chile cerca de 28%. Es decir, en Uruguay y Chile, aproximadamente, 3 de cada 4 trabajadores tiene un empleo formal. Argentina, por su parte, se encuentra en una situación intermedia pero preocupante: distintas estimaciones sitúan la informalidad laboral argentina en torno al 40%-45% de la fuerza laboral, lo que significa que casi la mitad de los trabajadores argentinos se gana la vida en condiciones precarias, sin estabilidad ni cobertura social.

³ Organización Internacional del Trabajo. (s.f.). La OIT, el sector privado y la promoción del empleo. Recuperado de <https://www.ilo.org/partnering-development/private-sector-and-non-state-partners/ilo-private-sector-and-employment-promotion>

⁴ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: La inclusión laboral como eje central del desarrollo social inclusivo. Santiago: Naciones Unidas. Recuperado de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/68702-panorama-social-america-latina-caribe-2023-la-inclusion-laboral-como-eje-central>

Esta alta informalidad va de la mano con la escasez de empresas: muchos trabajadores no registrados están ocupados en micronegocios de subsistencia. Esto evidencia cómo un tejido empresarial débil, compuesto por pocas empresas y mayormente de tamaño micro, tiende a generar empleo de baja calidad. Al haber menos empleadores formales compitiendo por trabajadores, una gran proporción de la gente termina en la economía informal.

La productividad es el tercer pilar interrelacionado. Por productividad entendemos la cantidad de *output* (producción o ingreso) generada por trabajador. Es un indicador de la eficiencia y el valor agregado de la mano de obra en una economía. Una alta productividad suele traducirse en mejores salarios y niveles de vida, mientras que una baja productividad condena a que, incluso, quienes tienen empleo ganen poco. Las diferencias internacionales en productividad laboral son enormes. En promedio, un trabajador de América Latina produce apenas un tercio de lo que produce un trabajador promedio de los países de la OCDE. Esta brecha incluso se ha ampliado: a principios de los '90 la productividad latinoamericana rondaba el 40% de la de la OCDE, y hoy es solo 33%⁵. La región se ha quedado rezagada en términos de incorporación de tecnología, capital físico y educación, factores que impulsan la productividad.

En nuestro país, esto se profundiza: Argentina perdió un 23% de productividad total de los factores entre 2007 y 2024. Es decir, el mismo stock de capital y trabajo producen casi un cuarto de unidades reales menos que hace 17 años⁶.

Esto es el resultado de una inestabilidad político-económica persistente durante los últimos 30 años, que ha profundizado desigualdades regionales e internas y consolidado una matriz productiva más acomodaticia que estratégica. En lugar de orientar el crecimiento hacia sectores con ventajas comparativas claras, como varias economías regionales actualmente relegadas, se ha privilegiado la inercia y el cortoplacismo.

⁵ FOCDE, CEPAL y CAF. (2023). Perspectivas Económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible. OCDE Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2023/12/latin-american-economic-outlook-2023_3f49ef87/5cf30f87-es.pdf

⁶ GMA Capital. (2025, 22 de mayo). Los 5 objetivos detrás del “plan de reparación histórica de los ahorros” de los argentinos. GMA Capital. <https://www.gmacap.com/reflexiones/los-5-objetivos-detras-del-plan-de-reparacion-historica-de-los-ahorros-de-los-argentinos>

Estas economías, con alto potencial, han sido sistemáticamente ignoradas en los programas de crecimiento sostenido, cuando en realidad podrían ofrecer ventajas competitivas y previsibilidad si fueran parte de una estrategia de desarrollo integral.

Un modelo que apunte a mejorar los términos de intercambio, redistribuir los factores productivos y planificar, con una mirada de largo plazo permitiría construir un sistema de distribución de la riqueza más justo y previsible. Pero esa arquitectura ha estado ausente. Lo que predomina es una escasez crónica de programas, de idoneidad técnica y de ideas. La degradación en la calidad y cantidad de políticas públicas presentadas por los *policy makers*, junto con la falta de recursos e instrumentos adecuados, dio lugar a un Estado que no acompaña ni regula de forma inteligente.

Un Estado que no cumple su rol como articulador de un proyecto de desarrollo nacional.

- +933.000 habitantes en el Gran La Plata.
- 3^{er} ecosistema emprendedor nacional, después de CABA y Córdoba.
- El Cinturón Verde platense se ubica como primera región productora de hortalizas del país.
- TecPlata es la terminal más moderna de Sudamérica y las grúas más nuevas que hay en Argentina.
- La Plata es la capital del conocimiento: presencia de universidades nacionales públicas y privadas.

En este contexto, solo un grupo reducido de empresas (por su capacidad de conexión, acceso a información o elasticidad de mercado) logró insertarse en nichos rentables y avanzar en procesos de modernización. Pero el mercado argentino es profundamente asimétrico: la mayoría de las firmas opera con baja escala, escasa tecnología y sin acceso al financiamiento. Esta fragmentación da lugar a lo que muchos describen como “dos economías” coexistiendo en un mismo país: una moderna y competitiva, otra atrasada e informal.

El resultado es una matriz productiva dual y desequilibrada que tensiona constantemente el modelo económico. Esa dualidad reduce la eficiencia sistémica, recorta los tramos expansivos del ciclo económico y profundiza los problemas estructurales de largo plazo. Así, el sistema formal se vuelve ineficiente e injusto, con asignaciones de factores productivos que responden más a estrategias de subsistencia que a criterios de racionalidad económica. Al mismo tiempo, el sector informal crece, sin derechos ni protección, atrapado en la espera de un ciclo virtuoso que nunca llega. La consecuencia es una distribución profundamente desigual de la producción y la riqueza: una minoría bien remunerada en sectores dinámicos y una mayoría atrapada en actividades de baja productividad, con ingresos precarios y sin perspectivas de movilidad.

El caso del Gran La Plata

El Gran La Plata cuenta con un entramado económico, institucional y territorial con capacidades realmente únicas en el país. Su matriz productiva combina industrias estratégicas como la Refinería de YPF en Ensenada; un polo científico-universitario que vincula investigación, tecnología y formación profesional; el cordón hortícola que abastece a millones de personas; el sector lácteo y agroalimentario; un puerto comercial y logístico; un sistema de salud pública y privada de referencia, y una fuerte presencia del sector público administrativo, que emplea a miles de personas en organismos provinciales, judiciales y educativos.

También destacan sectores como el deporte, la industria cultural y audiovisual, los servicios basados en el conocimiento, los servicios profesionales, el turismo local (con su patrimonio histórico y natural), y un ecosistema creciente de cooperativas, mutuales y emprendimientos de la economía social y solidaria.

Sin embargo, esta base productiva y de servicios convive con una realidad de fuerte desigualdad: un tejido informal extendido que sostiene a gran parte de su población en condiciones precarias, sin acceso a derechos ni estabilidad. Rubros como la construcción informal, el reciclado, el trabajo doméstico no registrado, la venta ambulante, el transporte no regulado y múltiples oficios sin formalización constituyen hoy una parte significativa del empleo real. Y junto a esto, una vasta red de barrios populares con déficits estructurales en vivienda, infraestructura, salud, educación y trabajo digno.

Esta coexistencia entre polos de alto rendimiento y territorios de exclusión deja en evidencia una fragmentación profunda (económica, territorial y social) que replica a escala local los desafíos del país: informalidad crónica, escasa articulación entre sectores, vulnerabilidad social persistente y un Estado muchas veces reactivo en lugar de estratégico.

Lo que sucede en el Gran La Plata es una muestra de lo que ocurre en muchos rincones del país. Hay universidades con miles de estudiantes, un sistema científico poderoso, industrias clave, una población diversa y capacidad instalada. Pero también hay barrios enteros desconectados del mundo productivo formal, donde la única opción es el "rebusque" o "la asistencia estatal".

La oportunidad está en articular lo que hoy aparece fragmentado. Integrar ciencia, producción, financiamiento y educación en estrategias locales de desarrollo. Promover políticas activas que incentiven la creación de empresas, la formalización y la capacitación permanente. Vincular grandes empresas con proveedores locales. Invertir en infraestructura productiva, como centros logísticos, parques industriales y corredores agroalimentarios.

No nos falta capital humano. No nos faltan ideas. No nos falta vocación de trabajo ni creatividad. No nos falta territorio fértil, ni capacidad científica, ni cultura productiva. Lo que nos falta es organización política, escala y visión de largo plazo. Nos falta convertir todo ese potencial en estructuras que generen empleo formal, riqueza colectiva y movilidad social.

Un país que quiere reducir la pobreza necesita multiplicar las empresas. Una política industrial inteligente que parta de un Estado estratégico activo como por ejemplo lo hizo Japón para reconstruirse entre los '60 y '90. Reorientando (y acompañando en el proceso) a empresas en sectores estratégicos.

Orientando las currículas de estudios a sectores donde el país iba a poner todo el esfuerzo porque realmente creía que esa era la salida social de reconstrucción de Japón. Ese denominado milagro japonés impulsado por la industrialización, el desarrollo tecnológico, la innovación y una fuerte mentalidad de trabajo que luego replica y potencia en el resto de la región. Ese rol del Estado de mirada de largo plazo, de diálogo y que acompaña al sector privado productivo es la clave para que se genere un ciclo virtuoso. La estabilidad, el plan estratégico, la transparencia de mercados, información perfecta, bajos costos de transacción, fomentar el conocimiento colectivo como base de capital humano y social, lleva a una matriz nueva de empresas formales, productivas, integradas a cadenas de valor, con incentivos claros para crecer y contratar. Eso se logra con un Estado eficiente y sobre todas las cosas colaborativo, que tenga cercanía con el pueblo, que fije reglas claras que den estabilidad al modelo, acceso al crédito, alianzas público-privadas, e inversión sostenida en innovación y formación laboral.

Una forma de ver la distancia que tiene hoy Argentina es la falta de reglas claras hasta para hacer la Ley marco de toda la política pública, la ley de Presupuesto. Esta Ley de Leyes materializa financieramente todas las políticas públicas que se llevarán durante el año y aquellas que afectan a más de un año. Lamentablemente, en Argentina es práctica común de prorrogarse por problemas de la política de turno y no cumplir con los mecanismos para garantizar la gestión financiera del Estado y, por ende, la transparencia en la ejecución del presupuesto para toda la ciudadanía⁷.

La política económica debe abandonar la lógica pendular, escuchar al pueblo, trabajar en forma de poliedro y apostar por una estrategia nacional de desarrollo productivo, respetando y fortaleciendo lo local.

⁷ La Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público. Entre otras cosas define los sistemas de control y gestión financiera para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de forma eficiente y transparente. Establece la obligación de las jurisdicciones y entidades de programar la ejecución física y financiera de los presupuestos. Promueve la transparencia al exigir que los presupuestos sean de conocimiento público y accesible a los ciudadanos. Define las responsabilidades de los funcionarios y autoridades en la gestión presupuestaria, lo que contribuye a la rendición de cuentas.

Indicador de integración y desarrollo

Desde el 1^{er} de enero del año 2018 el Observatorio de la UCALP comenzó a trabajar con la comunidad de la Arquidiócesis de La Plata de forma abierta y activa, desarrollando, principalmente, un Indicador propio que releva el grado de integración y desarrollo que poseen los barrios comúnmente denominados “populares”, en los que habitan en la actualidad más de 232.500 personas.

La construcción de dicho Indicador y su continuidad interanual posibilitó generar más y mejor información sobre la situación en la que se encuentran los más “olvidados” y “desechados” de la sociedad platense. A saber, este es actualmente el único informe social, abierto y actualizado que ofrece datos y un análisis detallado de la situación pre- y post- pandemia en el Gran La Plata, revelando el impacto de la crisis socio-económica y socio-ambiental en las poblaciones que ya eran de por sí las más vulnerables de la región.

En la edición 2024, el Indicador de “Integración y Desarrollo” llegó a medir 42 variables explicativas, 10.000 datos y 3 dimensiones de la vida cotidiana de la población de la región (social, económica y ambiental). Por la multidimensionalidad que constituye este instrumento de medición, el mismo es utilizado por los Gobiernos locales y provincial, y organizaciones de la sociedad civil (e.g. Cáritas La Plata, Banco Alimentario, Red de Alimentos, Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y por la propia UCALP al momento de ejecutar talleres de nutrición, RCP, primera infancia, etc.).

En este sentido, el indicador sobrepasa el mero ámbito académico-científico y ofrece la posibilidad de diseñar acciones concretas para el beneficio de las familias más vulnerables de la región del Gran La Plata. Esto nos ha permitido desarrollar una fuerte presencia territorial y llevar adelante iniciativas dirigidas a la comunidad. Además, nos proporciona una base propia de datos primarios que posibilita y promueve la investigación, la interacción y el crecimiento conjunto de otras unidades académicas con las que trabajamos en conjunto, la profundización sobre variables sociales, el crecimiento de actividades conexas a la Universidad, y la extensión universitaria con prácticas profesionales de alto valor social.

En ese sentido, desde 2023 entre sus variables incorporamos la presencia de emprendimientos dentro del barrio como señal de dinamismo económico y arraigo comunitario. Así relevamos actividades como kioscos, almacenes, peluquerías, viveros y otros pequeños negocios que cumplen un doble rol: generan ingresos para las familias que los sostienen y, al mismo tiempo, fortalecen la vida económica local.

La existencia de estos emprendimientos, aunque muchas veces informales o de baja escala, representa una forma concreta de inclusión productiva en contextos de alta vulnerabilidad.

En la actualidad, la mitad (130) de los barrios relevados cuenta con emprendimientos activos (kioscos, viveros, peluquerías, etc.), lo cual refleja tanto una voluntad de trabajo como una falta de escala y formalización.

Su reconocimiento dentro del indicador permite visibilizar las capacidades presentes en los territorios, más allá de los diagnósticos centrados solo en carencias.

La precariedad estructural que atraviesan muchos barrios populares del Gran La Plata no solo limita las condiciones de vida digna, sino que compromete seriamente la formación de capital humano y las posibilidades futuras de integración laboral.

En ese sentido, el Indicador de Integración y Desarrollo arroja que: 6 de cada 10 asentamientos no cuentan con agua potable, 9 de cada 10 carecen de cloacas, y 8 de cada 10 no están conectados a la red de gas. Estas condiciones afectan directamente la infancia, y se traducen en problemas de salud persistentes.

La mitad de los barrios presenta focos contaminantes, y 7 de cada 10 tienen elementos que favorecen la reproducción del dengue o la presencia de perros en la calle, lo cual incrementa los riesgos sanitarios.

En el plano educativo, 7 de cada 10 barrios no tienen conexión segura a la red eléctrica, 5 de cada 10 tienen una escuela a más de 10 cuadras y, aunque 6 de cada 10 tienen acceso a internet (un saldo positivo de la pandemia), también se reportan efectos adversos como la ludopatía digital entre jóvenes.

Y apenas 4 de cada 10 tienen una parada de colectivo cercana, lo que dificulta la movilidad laboral. Esta combinación de carencias condiciona el acceso a oportunidades educativas y laborales, y traba el desarrollo de capital humano, perpetuando la pobreza intergeneracional.

Por eso, mejorar la infraestructura básica, fomentar los emprendimientos de cercanía y garantizar el acceso a servicios esenciales son políticas necesarias para construir trayectorias laborales sostenidas y romper el círculo de la exclusión.

- +349.000 personas en situación de pobreza.
- +68.232 personas en situación de indigencia.
- +232.500 personas viviendo en asentamientos:
 - 30.061 niños y niñas de 0 a 9 años.
 - 35.361 adolescentes de 10 a 18 años
 - 35.600 adultos mayores.
- 262 barrios:
 - Siendo la toma de Los Hornos (160 hectáreas y 2.600 familias), la más grande de la región.
 - La cantidad de asentamientos es la más grande de la provincia de Buenos Aires y equivale a la misma cantidad de la que tiene la provincia de Córdoba.
- Las variables que empeoraron respecto al año anterior son:
 - Acceso seguro a la energía eléctrica.
 - Ampliación de la red cloacal.
 - Acceso al agua potable.
 - Calles internas y perimetrales deterioradas o no asfaltadas.
 - Tratamiento de residuos, observando mayor cantidad de basura en barrios.
 - Factor contaminante vinculado a la contaminación de canales, vertederos, o presencia dentro o en las inmediaciones de barrio de fábricas o industrias contaminantes y/o áreas de desechos industriales.
 - Hacinamiento.
 - Aumento de la cantidad de pastizales y focos de dengue.
- 9 de cada 10 barrios necesitan mayor integración: 7 de estos lo necesitan de forma urgente. No garantizan el derecho al hábitat y al desarrollo humano por no contar con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos.

Conclusión: sin empresas, hay pobreza

Reducir la pobreza estructural exige mucho más que programas asistenciales o medidas de coyuntura. Requiere activar un proceso sostenido de creación de oportunidades. Y eso solo se logra con una economía que crezca, que genere empleo de calidad y que integre productivamente a sus territorios.

Porque sin empresas que inviertan, generen trabajo y mejoren la productividad, no hay base material sobre la cual construir ninguna política de desarrollo sostenible. Las comparaciones internacionales lo confirman: los países que lograron reducir la pobreza de forma persistente son aquellos que fortalecieron su tejido empresarial, promovieron la formalización laboral y elevaron los niveles de productividad.

Pero el crecimiento no puede ser un fenómeno abstracto. Tiene que expresarse en cada territorio. En cada parque industrial, cada vivero, cada pyme familiar, cada emprendimiento de barrio. Por eso, la mirada local no es una opción: es el punto de partida.

Lo que sucede en el Gran La Plata, con su entramado productivo diverso pero fragmentado, es un reflejo de los desafíos estructurales que enfrenta el país. Sin políticas activas que articulen lo público, lo privado y lo comunitario, estas fracturas tienden a profundizarse.

En este contexto, el fortalecimiento del sector privado debe estar acompañado por un Estado inteligente y eficiente, que simplifique trámites, reduzca trabas impositivas, fomente el crédito productivo, invierta en infraestructura estratégica, impulse la capacitación laboral y oriente los recursos hacia sectores de alto impacto social y económico.

Pero nada de esto es posible sin diagnóstico. Sin información, no hay decisión inteligente. Sin datos, no hay política pública eficaz.

Allí es donde los Observatorios territoriales y herramientas como el Indicador de Integración y Desarrollo cumplen un rol fundamental. No solo permiten medir y visibilizar las brechas, sino también identificar capacidades locales, orientar intervenciones concretas y construir una nueva narrativa: una en la que el desarrollo sea un derecho colectivo.

Medir los emprendimientos de barrio, relevar las condiciones de vida, mapear las carencias y también los activos comunitarios nos permite dejar de hablar de los territorios vulnerables como espacios pasivos, y empezar a verlos como parte activa de una solución inclusiva.

Se necesita una política social que mire al futuro, que invierta en la capacidad de las personas para salir de la pobreza por sus propios medios.

El verdadero desafío es construir un modelo que combine un entramado empresarial denso, una política pública con visión de largo plazo y una estructura institucional que actúe con inteligencia territorial.

En definitiva, el camino hacia una Argentina más integrada y con menos pobreza necesita más empresas, más integración territorial, más datos y más política con sentido estratégico.

